

Vivir sin violencia

ALICIA POZA

La sociedad está herida porque la mitad de las personas que la componen está amenazada o marginada. Me refiero, claro está, a las mujeres. Nosotras, que garantizamos el cuidado y el mantenimiento de lo más preciado, la vida, paradójicamente somos las más maltratadas, discriminadas y desprotegidas.

La violencia contra las mujeres ha sido una constante a lo largo de la historia y, mal que nos pese, todavía en los albores del siglo XXI sigue siendo un peso que llevamos sobre nuestras espaldas, como tantas otras cosas. Nos rasgamos las vestiduras cada vez que una mujer es violada, golpeada o asesinada, nos dedicamos a condenar los hechos y a castigar al culpable directo, pero nunca llegará el fin de esta violencia si no vamos a la raíz, si no tratamos de desentrañar y combatir las verdaderas razones que la generan.

En los últimos años se viene penalizando en mayor medida las agresiones de los hombres contra las mujeres, pero, en lugar de ser interpretadas como manifestaciones de problemas profundos, la sociedad patriarcal las interpreta como casos aislados, como acciones patológicas de quienes las cometen y no como un problema social de fondo.

Necesitamos que las instituciones públicas cumplan su función como garantes de la igualdad, entre otras cosas reconociendo las conquistas y la preparación cada vez mayor de las mujeres para ejercer una responsabilidad profesional y dirigir cualquier clase de organización social. Para ello, es necesario que se desarrolle una verdadera democracia representativa y redistributiva. Hace ahora 75 años que las mujeres conseguimos el voto en España y el poder sigue estando mayoritariamente en manos masculinas.

El gasto público parece tener otras prioridades que la inversión en el desarrollo de las capacidades femeninas. En un verdadero Estado de Bienestar, debe haber políticas sociales que posibiliten realmente la conciliación, para que las mujeres podamos ser autónomas y aumentar nuestra presencia en el mercado de trabajo, y para que los hombres puedan dedicar tiempo a sus criaturas o a sus mayores. Necesitamos un mercado de trabajo en el que se apueste claramente por la creación de empleo público a través de inversiones en las áreas sociales: educación, sanidad y servicios sociales. Así se



JOSÉ IBARROLA

logran varios objetivos a la vez: se reduce el desempleo, se garantizan unos servicios públicos universales y se posibilita la conciliación y la igualdad entre mujeres y hombres.

Si analizamos los presupuestos públicos de nuestra Región, la tendencia es justo la contraria: recortar empleo público y privatizar servicios, creando así más precariedad y más discriminación. Esto afectará especialmente a las mujeres y las hará más débiles y dependientes, alimentando el caldo de cultivo para la violencia machista. Esto también es violencia, una violencia invisible pero igualmente destructiva y culpable.

A nuestra administración regional, el cuidado de las más y los más desprotegidos parece serle indiferente, aunque se llene la boca diciendo lo contrario. Y es que la sensibilidad no parece ser una virtud de nuestros gobernantes, sino «cosa de mujeres», que sin embargo están apartadas de la gestión pública o son poco relevantes dentro de ella para reo-

orientar las políticas públicas. Necesitamos más cuidado en el ámbito público.

En cuanto a la administración del Estado, ahora que la crisis nos ha caído encima por obra y gracia de los especuladores y los corruptos, en lugar de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias mediante desgravaciones fiscales y ayudas directas a quienes han provocado la crisis, debería estimular la economía mediante la creación de empleo público en áreas sociales.

La violencia contra las mujeres se ejerce de muchas maneras y en muchos ámbitos: la pareja, la familia, el trabajo, la publicidad, el control de nuestra sexualidad y nuestra capacidad reproductiva, el techo de cristal que nos impide acceder a puestos de responsabilidad, etc. Y eso a pesar de que hoy las mujeres estamos tanto o más preparadas que los hombres, somos positivas y creativas, amamos y respetamos a los demás, y sólo queremos que se aplique con nosotras el mismo comportamiento que noso-

tras tenemos hacia quienes nos rodean.

La violencia contra las mujeres debe ser combatida en todas sus formas, sea violencia física, psicológica o social. Para acabar con ella, tenemos que conseguir autonomía, libertad y poder en la misma medida que los hombres. Necesitamos leyes que nos protejan y que castiguen a los culpables; necesitamos que esas leyes se cumplan adecuadamente y que las administraciones públicas pongan los recursos necesarios para ello; necesitamos también políticas activas en el terreno de la prevención, porque como dice el refrán, *más vale prevenir que curar*, y en este terreno se está haciendo muy poco; necesitamos, en fin, políticas sociales que promuevan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos: la familia, el trabajo, la política y la cultura.

Pero todo eso no basta, porque corremos el peligro de que se ejerza una excesiva tutela sobre nuestras vidas y que se nos trate como a menores de edad. No sólo con las leyes se cambia la vida de las personas. Una legislación adecuada y bien aplicada es de gran ayuda, pero es preciso que seamos las propias mujeres quienes comencemos a ejercer la autonomía, la libertad y la responsabilidad en todos los ámbitos de nuestra vida.

Las mujeres de a pie, comprometidas con la educación de nuestras hijas e hijos, o de nuestras alumnas y alumnos, debemos contribuir con nuestra lucha diaria para que se modifiquen actitudes y conductas ancestrales, que siguen siendo reproducidas pero no reconocidas. Esto comienza en la familia, y se agrava de manera escandalosa en la educación religiosa, en la que las mujeres somos reducidas a úteros de alquiler, ciudadanas de segunda.

No podemos seguir alimentando una idea machista del amor en la que las mujeres nos inmolamos por creer que en nombre del amor verdadero todo debe sacrificarse y consentirse. Necesitamos una nueva educación de los sentimientos, tanto para hombres como para mujeres, que nos ayude a convivir en paz y en igualdad. Necesitamos una educación para la ciudadanía que sea también una educación para la mutua ciudadanía.

Alicia Poza es portavoz del STERM-Intersindical

